I. EXPEDIENTE D-11345 - SENTENCIA C-567/16 (Octubre 19)
M.P. María Victoria Calle Correa

1. Norma acusada

LEY 891 de 2004

(Julio 7)

Por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento Nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones

ARTÍCULO 4o. A partir de la vigencia de la presente ley las administraciones nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán estarán autorizadas para asignar partidas presupuestales en sus respectivos presupuestos anuales, destinadas a cumplir los objetivos planteados en la presente ley.

El Gobierno Nacional queda autorizado para impulsar y apoyar ante los Fondos de cofinanciación y otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a las que se autorizaren apropiar en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, destinadas al objeto que se refiere la presente ley.

PARÁGRAFO. Las apropiaciones autorizadas dentro del Presupuesto General de la Nación, deberán contar para su ejecución con programas y proyectos de inversión.

2. Decisión

Declarar **EXEQUIBLE**, por los cargos analizados, el artículo 4º de la Ley 891 de 2004, "*Por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento Nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones*".

3. Síntesis de la providencia

La Corte Constitucional debía resolver la acción pública instaurada contra el artículo 4º de la Ley 891 de 2004 '*Por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento Nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones*'. En concepto de la demandante, dicha norma vulnera el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 19 y 136-4 de la Constitución, por cuanto autoriza a entidades estatales de diversos órdenes a destinar asignaciones presupuestales con el propósito de cumplir los objetivos allí previstos, que básicamente son los de reconocer, exaltar y salvaguardar las Procesiones de Semana Santa en Popayán. De acuerdo con la acción pública, la norma acusada tiene el efecto de financiar y fortalecer un culto religioso, lo cual desconoce los principios de neutralidad religiosa, pluralismo religioso, búsqueda del interés general, igualdad y libertad religiosa, y prohibición de decretar donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer derechos reconocidos por ley preexistente. La Sala Plena examinó los argumentos

presentados en la demanda, en las intervenciones escritas y en la audiencia pública celebrada el 26 de septiembre del presente año, y concluyó que la norma acusada no vulnera las disposiciones constitucionales invocadas.

Advirtió que las Procesiones de Semana Santa de Popayán forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y de la nación, y que en virtud de la Constitución es deber del Estado adoptar medidas para su salvaguardia, sin que se encuentre descartada en principio la asignación de finanzas públicas. La Corte constató que la subvención de las Procesiones de Semana Santa en Popayán con dineros públicos tiene impacto en un hecho religioso, pero reiteró entonces la jurisprudencia constitucional, según la cual bajo ciertas condiciones es posible salvaguardar, incluso a través de la asignación de finanzas públicas, manifestaciones culturales con connotaciones religiosas. Con arreglo a estas condiciones, el Estado no puede 1) establecer una religión o iglesia oficial; 2) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; 3) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia; 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Para adoptar normas que autoricen la financiación pública de bienes o manifestaciones asociadas al hecho religioso 6) la medida debe tener una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente y 7) debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones. Luego de verificar que la norma cumplía estos requisitos, la Corte la declaró exequible.

4. Salvamento y aclaraciones de voto

El magistrado **Jorge Iván Palacio Palacio** se apartó de la decisión mayoritaria, toda vez que en su concepto la Ley 891 de 2004 en su integridad, quebranta el principio de laicidad y neutralidad religiosa del Estado colombiano, que a la luz del Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 13 y 19 de la Constitución, debe garantizar el pluralismo, la libertad religiosa y la igualdad de trato de todas las iglesias, sin privilegiar la salvaguarda de un rito tradicional de indudable contenido religioso de una iglesia específica, que rompe con la neutralidad que debe mantener el Estado y sus autoridades, en respeto de la libertad conciencia y de cultos.

A su juicio, en este caso existían las mismas razones, con fundamento en las cuales, la Corte declaró inexecutable en la sentencia C-224/16, el artículo 8º de la Ley 1645 de 2013, "por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Pamplona", que autorizaba igualmente, la asignación de partidas presupuestales para el fomento y preservación de esta ceremonia religiosa católica. Observó que en los antecedentes de la Ley que declaró como patrimonio cultural inmaterial de la Nación las Procesiones de la Semana Santa en Popayán, se advierte que predomina una motivación y significado esencialmente religioso que se busca exaltar, fomentar y proteger, más allá de que se considere como manifestación de una tradición cultural.

Los magistrados **Aquiles Arrieta Gómez** y **Gloria Stella Ortiz Delgado** anunciaron la presentación de sendas aclaraciones de voto sobre algunos de los fundamentos de la decisión de exequibilidad.

LAS VIUDAS Y VIUDOS QUE HAYAN CONTRAÍDO UN NUEVO MATRIMONIO NO PIERDEN POR ESTE HECHO SU DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. RATIFICACIÓN DE UNA LÍNEA JURISPRUDENCIAL QUE ELIMINA UNA DISPOSICIÓN DISCRIMINATORIA QUE VULNERA LOS DERECHOS DE AUTONOMÍA PERSONAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES